

Prensa Obrera

POR UN PARTIDO OBRERO



Jueves
26 de marzo
de 2020

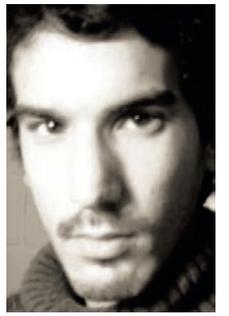
Año XXXVII
N° 1.586

\$40
www.po.org.ar
www.prensaobrero.com
prensaobrera@gmail.com

Bartolomé Mitre 2162
C1039AAB
Ciudad de Buenos Aires

Editorial

Frente a la catástrofe
que se avecina:
impulsemos
un programa
de salida



MARIANO FERREYRA
LA LUCHA CONTINUA

CONTROL POPULAR

EN LA CUARENTENA



La cuarentena, exigida por los trabajadores, no está afectando en su implementación igual a empresarios que laburantes.

El Estado hace valer los negocios por sobre la salud de la población trabajadora.

Los trabajadores arriesgan su vida para ir a trabajar a actividades no esenciales como la producción de golosinas o cerveza. Los despidos se suceden masivamente entre los precarizados y también entre los efectivos.

Trabajadores de todo el país vienen protagonizando importantes denuncias y acciones. En varias situaciones, la voracidad patronal tuvo que retroceder.

El Estado no ha garantizado una producción de barbijos ni de alcohol en gel suficiente. Y valen oro, cuando deberían ser distribuidos gratuitamente.

No hay una producción masiva de respiradores.

No se han colocado los recursos de la salud privada a disposición de la población. Al contrario, las prepagas han

incrementado la publicidad buscando lucrar con la pandemia.

La tropa en la calle prepotente a jóvenes de barrios populares, en otros casos se exige cuarentena a trabajadores que quedan tiroteados entre el despido y la detención.

Pero el Estado no moviliza recurso alguno para garantizar agua potable, alimentos ni insumos de limpieza a quienes carecen de ellos. En los 4.400 barrios populares del país, el hacinamiento no permite "aislamiento social".

Los 10 mil pesos que otorgará la Anses, el 15 de abril, a desocupados y monotributistas llegarán a un mes de la cuarentena. Absurdo, deberían ser 30.000 ya y otro tanto en abril.

La catástrofe capitalista que la pandemia pone de manifiesto recién comienza.

Es evidente que la salida de esta situación requiere una reorganización social y económica profunda.

Sólo bajo el control de los trabajadores y

el pueblo explotado podremos colocar los recursos de la sociedad en función de las necesidades sociales y no del lucro.

Reclamamos la centralización del sistema de salud público y privado para garantizar el plan de contingencia frente a la pandemia; una reconversión industrial para garantizar la producción masiva de los elementos necesarios para el sistema de salud y el alimento.

Por un subsidio de 30.000 pesos a todos los que no tienen empleo formal; formación de comités populares de control de la asistencia alimentaria, para desarrollar los reclamos del sistema de salud y de todos los aspectos relacionados con la cuarentena.

Y, fundamental: anular de inmediato, de manera unilateral, todo pago de la deuda pública, a excepción de los bonos en manos de la Anses.

Los recursos están, se los lleva el capital financiero internacional.

Para qué entran las Fuerzas Armadas en escena

En las últimas horas se están confirmando las peores hipótesis: la entrada de las Fuerzas Armadas en el operativo sanitario del coronavirus tiene por objetivo último el despliegue militar y, a su turno, un estado de sitio, declarado o no, ante posibles estallidos sociales por el hambre. En la misma línea están preparando a la Bonaerense.

El sitio "Diputados Bonaerenses" publica detalles de un documento reservado que revela el alcance de la intervención de las Fuerzas Armadas en la crisis. En el caso de la provincia de Buenos Aires se designan "tres comandos que se repartirán los 135 distritos". La "operación consistirá en la organización, adiestramiento, alistamiento y despliegue, a orden, de personal y medios adecuados para llevar adelante la tarea". Estas directivas se dieron a partir de la Resolución 88/2020, firmada por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien dispuso la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo y contención sanitaria para combatir la pandemia.

En ese texto -continúa el portal- se aclara que el instrumento militar de la Defensa Nacional "será empleado en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de Argentina; la vida y la libertad de sus habitantes", pero que, según la ley de Defensa, se puede utilizar para "evitar, anular o disminuir los efectos que la guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier otro desastre de otro origen puedan provocar sobre la población y sus bienes...".

El sitio puntualiza que "el tema que preocupa a la dirigencia política y en particular al gobierno nacional, es la respuesta



de la población ante el endurecimiento de las medidas de prevención... y en particular cuál puede ser la respuesta de los sectores más informales y postergados de la economía y la situación de los barrios más vulnerables. De la noche a la mañana, serán millones los cuentapropistas sin ningún ingreso... se trata de una bomba de relojería a desactivar, en este aspecto es clave la ayuda que puedan prestar las Fuerzas Armadas, la única institución con la logística y recursos técnicos y humanos capaz de dar respuesta y contención a los sectores más vulnerables".

Más claro, echarle agua. La fabricación de alcohol en gel (absolutamente menor) o de barbijos y camisolines por las sastrerías militares, la distribución de kits, los hospitales de campaña que se desempolvan para ampliar la capacidad hospitalaria, son un puente, un "entre", para colocar a las Fuerzas Armadas en el escenario de la lucha contra el coronavirus. Se está haciendo hincapié en la capacidad logística de traslado para repartir incluso la ayuda ali-

mentaria, lo cual es absurdo, porque el país tiene una flota de camiones descomunal que estarán progresivamente parados por la cuarentena, que pueden ser puestos a disposición a partir de intervenir las empresas de transporte por parte del Estado.

A su vez, *Clarín* de la mañana del 23/3 titula: "Preparan la Bonaerense para desbordes". Incluso se toman en cuenta los 90.000 efectivos totales, muchos de los cuales no están en la calle, para volcar más efectivos a la acción directa "porque hoy no estamos en la etapa más complicada, eso puede llegar en unos días (cuando) pueden empezar a aparecer focos de violencia vinculados a la falta de ingresos y el hambre en los sectores más desprotegidos", continúa el matutino de Magnetto, en boca de voceros del gobierno bonaerense. Por otra parte, los helicópteros de las Fuerzas Armadas harán vuelos de "observación para divisar zonas donde se produzcan amontonamientos de gente" (idem, pág. 5), lo cual es una tarea prohibida por la ley de inteligencia.

Estos detalles completan el cuadro. Es evidente que cuando Sergio Berni, hace un par de días, tomó juramento a los bonaerenses en términos castrenses de subordinación y valor, diciendo que "no es hora de tibios ni vacilantes", lo hizo preparando a las fuerzas de seguridad para el previsible estallido social del hambre y la pobreza.

Nuestros reclamos

Lo descripto retrata un régimen. Saben que las medidas que están anunciando son aspirinas para una situación terminal económica y social, y preparan un estado de sitio sin decretarlo, mediante las herramientas legales preexistentes. Un fino estilo "nacional y popular" que acompaña el set de medidas que, sin embargo, no rompen con la deuda externa, la fuga brutal de capitales, la huelga de inversiones energética y la ola de suspensiones y despidos que ya teníamos y que se agrava todos los días si no se dispone la prohibición de despidos y suspensiones no remuneradas.

Se anunció el importe de

10.000 pesos por única vez ¡en abril! para los sectores desprotegidos, cuando un cuentapropista de la menor escala imaginable debe recaudar al menos 1.000 pesos por día, para reunir parte de la canasta de pobreza que hoy está en 40.000. Al mismo tiempo, anuncian que se suspenderán los cortes de servicios por falta de pago, cuyo alcance por ahora desconocemos, pero es una incógnita qué ocurrirá con los alquileres, frente a los cuales se anunciaría la suspensión de desalojos, lo cual no resuelve el problema de los inquilinos que no pueden pagar el alquiler.

Nuestro planteo es que se interrumpa unilateralmente el pago de la deuda y todos los recursos del Estado sean puestos al servicio del rescate de la masa de la población laboriosa, tanto en los salarios en blanco, como los salarios informales y a los cuentapropistas y desocupados: que se les otorgue un seguro de 30.000 pesos este mismo mes. Esto permitirá cumplir el aislamiento, porque la necesidad y el hambre son el principal problema del no cumplimiento. El segundo, las patronales como Techint, Cervezas Quilmes y tantas otras, que obligan a sus trabajadores a trabajar, como la propia provincia de Buenos Aires, que pretendió hacer concurrir a clases inexistentes a los docentes, creando tanto o más peligro que los imbéciles que pretenden tomarse vacaciones con motivo de la cuarentena.

La salida no es la represión. No al estado de sitio, de hecho o de derecho, decretado o disimulado. El despliegue de tropas no solo no servirá para derrotar al virus, tampoco al hambre.

Néstor Pitrola



Suscribite a **Prensa Obrera.com**



Frente a la catástrofe que se avecina: impulsemos un programa de salida

JUAN GARCÍA

La declaración de la OIT dando cuenta de que en el marco de la crisis mundial, potenciada por el coronavirus, podrían perderse 25 millones de empleos a nivel mundial, con toda su gravedad, se está quedando corta, vista la evolución de las circunstancias. Según el Bank of América, los despidos sólo en Estados Unidos sumarían 3,5 millones en el segundo trimestre, cuando se espera que la economía “colapse” con un 12% de retracción. En China, el retroceso industrial interanual en los dos primeros meses del año llega al 13,5% y la caída del consumo asciende al 20% (*El Cronista*, 25/3). La recesión mundial que ya se venía desarrollando se transforma en una depresión que se compara con la de la crisis del '29. Los desplomes bursátiles generalizados muestran la amplitud de esta caída, además del carácter ficticio de la valorización previa.

La falta de coordinación para atender la crisis es, en realidad, la continuidad, en el marco de la pandemia, de la guerra comercial precedente. El comercio mundial se derrumba a pasos acelerados. El colapso de ramas enteras de la economía, como la aeronáutica o la muy golpeada automotriz, dará lugar a brutales choques internacionales para reorganizar la actividad a costa de los competidores. La crisis petrolera, cuyo centro es el choque de fondo entre Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos, es un factor de agravamiento de la crisis.

Los rescates estatales que se discuten a esta altura de la crisis son, fundamentalmente, salvatajes al capital. La inyección de liquidez en la banca, los paquetes de estímulos multimillonarios para las empresas e inclusive las nacionalizaciones, como la de Alitalia, no sólo no garantizan frenar la recesión sino que amenazan con llevar a los Estados mismos a la bancarrota. La proporción de estos fondos que se destina a asegurar los ingresos de los trabajadores es ínfima.

La situación sanitaria no evoluciona mejor. El progreso del virus en Estados Unidos está dejando en evidencia el colapso del sistema sanitario yanqui, con millones de personas sin asistencia sanitaria. En Europa, la catástrofe italiana no cesa, mientras se suman al primer pelotón de países afectados España y Alemania. Lo mismo se prefigura en Inglaterra, donde el famoso National Health Service (servicio nacional de salud) ha sufrido recortes a repetición en la última década. Los sistemas de salud víctimas del ajuste y la privatización en los años precedentes no dan abasto para atender la magnitud de la epidemia que, de acuerdo con las estimaciones más pesimistas, podría llegar en sucesivas oleadas a afectar al 80% de la población mundial y a causar



muerdes en el orden de los 60 millones (*Financial Times*, editorial de Martin Wolf, 24/3).

Argentina en la tormenta

Argentina no escapa a estas tendencias de fondo, con el agravante de que ingresa en la crisis luego de dos años de despidos y rebajas salariales contra los trabajadores y de largos años de estancamiento o recesión económica. En ese marco, las medidas del gobierno de Fernández para contener la crisis económica y sanitaria son una aspirina para curar una enfermedad terminal. Los 7 millones de trabajadores en negro, desocupados y cuentapropistas que están sufriendo ya los efectos de la crisis, deberán esperar hasta abril para cobrar la suma de 10.000 pesos, que no cubre las necesidades de alimentación de una familia. Los despidos no sólo no se prohíben sino que están empezando a producirse, comenzando por los trabajadores en negro. La crisis industrial, que ya venía golpeando y llegando a los sectores con más espaldas de la industria (Vicentin), ahora amenaza con fuerza a grandes empresas. La quiebra petrolera amenaza con golpear a YPF y arrastrar a la bancarrota a las provincias del sur del país. Este cuadro se desarrolla ante el silencio cómplice de las burocracias sindicales.

Pero, a pesar de estas condiciones gravísimas, el grueso de los recursos nacionales sigue yendo al pago de la deuda externa, como lo muestran los 130 millones de pesos volcados a los pagos de deuda entre enero y febrero, otros 150.000 millones se completarán al finalizar marzo.

Mientras Guzmán se prepara para presentar su propuesta de renegociación de la deuda en dólares, en un marco de derrumbe del valor de los bonos, evita

el default de la deuda en pesos con una emisión descomunal, aunque parte de la deuda se renueve o reperfile. El gobierno discute el problema de la emisión monetaria, pero la emisión fue fundamentalmente para garantizar esos pagos. Los vencimientos en abril alcanzan a 156.000 millones de pesos y 506 millones de dólares. Lo cierto es que los niveles de emisión monetaria, de continuar el pago de la deuda, nos pondrán al borde de una hiperinflación.

Lo que el gobierno no paga y logra refinar mediante canjes tiene condiciones leoninas, porque como se reconocen los bonos a “valor técnico”, se capitalizan intereses futuros y la cuenta de la deuda a corto plazo no para de aumentar. La caída de la recaudación y el marco de una bancarrota general van creando las condiciones de un default.

Es en este cuadro social y económico crítico que se discute la participación del Ejército en los operativos de contención social frente a la pandemia. No es casual: ocurre que, dado el cuadro social, las fuerzas represivas se preparan para un escenario de movilizaciones contra el hambre en los próximos meses (ver nota “¿Para qué entran las Fuerzas Armadas en escena?”, de Néstor Pitrola). La militarización de la cuarentena se desarrolla teniendo esta perspectiva a la vista.

Impulsemos un programa alternativo

Hay que tener en cuenta que un default no es el no pago de la deuda que impulsa la izquierda. Un default impuesto por las circunstancias golpeará la cadena de pagos, acentuará la fuga de capitales y la devaluación del peso, agrandando la brecha, cuando el contado con liquidación llega a los 91 pesos al 25 de marzo (una brecha del 50%). El no pago de la deuda que promovemos debe ir acom-

pañado de medidas complementarias, como la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para volcar los recursos a desarrollar un plan económico y productivo en función de las necesidades de las masas. Con la nacionalización de los hidrocarburos y de la energía en general sin indemnización alguna, para poner esos recursos al servicio del país y no de los monopolios que operan en la actividad.

La situación argentina y mundial pone blanco sobre negro una disyuntiva de fondo: rescatar al capital o a los trabajadores. La “unidad nacional” que promueve el gobierno de Fernández omite que los recursos fundamentales del país se vuelcan al pago de la deuda en favor de grupos económicos de los especuladores financieros. El subsidio a los desocupados que estamos promoviendo, de 30.000 pesos asignado a 7 millones de compañeros, llegaría apenas a igualar el costo de los vencimientos de deuda en abril.

Nadie ha tocado a las empresas de salud privada, cuando la cantidad de camas de terapia y respiradores del sistema privado de la Ciudad de Buenos Aires quintuplica a las del Estado. Es necesaria la centralización del sistema de salud público y privado para garantizar el plan de contingencia frente a la pandemia. La situación plantea impulsar una reconversión industrial para garantizar la producción masiva de los elementos necesarios para el sistema de salud: respiradores, camisolines, batas, alcohol en gel, barbijos y mascarillas. El reparto masivo de los elementos de limpieza y alimentos en los barrios populares es otra medida fundamental.

Las organizaciones sociales y populares están llamadas a cumplir una tarea central en la crisis. La formación de comités populares de control de la asistencia alimentaria, para desarrollar los reclamos del sistema de salud, o incluso de control de todos los aspectos relacionados con la cuarentena, es fundamental. Desde el comienzo de la crisis, la participación de los trabajadores viene siendo muy importante, porque han impuesto el cese de actividades mediante reclamos y paros parciales en todas las ramas no esenciales de la economía, contra la tendencia patronal (y de la burocracia sindical) a priorizar las ganancias. Esta tarea sigue teniendo vigencia frente al reclamo patronal de reanudar la producción el 31 de marzo. Con la cuarentena en marcha, la intervención popular debe tomar en sus manos las tareas que surgen de la crisis e impulsar un programa de reclamos para garantizar las condiciones sanitarias y sociales básicas para asegurar la subsistencia de millones de trabajadores y trabajadoras.

Universidad contra el Covid-19, sí; trabajo gratuito, no

El martes 24 de marzo se anunció la convocatoria oficial de estudiantes para actuar como “voluntarios” en el marco de la crisis por coronavirus. La excepcionalidad que implica enfrentarnos a una pandemia requiere de la toma de medidas extraordinarias por parte del Estado, que se dispongan de todos los recursos necesarios y, lógicamente, la universidad debe estar al servicio de esta pelea. No obstante, las autoridades y el gobierno no pueden con palabras lindas maquillar un llamado al trabajo gratuito y la precarización en la juventud.

“Voluntarios”

El llamado a voluntarios se presenta a través de las redes sociales del Rectorado, páginas de distintas facultades y de agrupaciones estudiantiles que responden directamente a la camarilla que dirige la facultad, como Nuevo Espacio en Ciencias Médicas o el Edi en Psicología. “El gobierno busca sumar a estudiantes del último año de Medicina y Enfermería para que participen del operativo destinado a contener la pandemia. Estiman que los profesionales disponibles no serán suficientes para enfrentar el avance del virus en las próximas semanas, cuando se estima el pico de casos” (La Nación, 23/3).

La importancia de que quienes estudiamos nos pongamos al servicio de la pelea contra la pandemia, como están haciendo los trabajadores de la salud de todo el país, es un planteo válido en esta situación excepcional. No obstante, la palabra “voluntario” es sinónimo de trabajo gratuito. El gobierno debe garantizar, por el contrario, el salario, la capacitación y las condiciones laborales de los estudiantes que participen de esta iniciativa; otra cosa es la superexplotación de jóvenes voluntarios. A su vez, la medida debe garantizar las condiciones y el equipamiento correspondiente para sostener la salubridad e higiene de los estudiantes



Agustina Larsen

e impedir que ellos mismos se conviertan en un factor de transmisión de la enfermedad.

Sistema de salud o pago de la deuda

Los especialistas más optimistas proyectan que la cantidad de infectados llegará a un aproximado de 250 mil personas en pocas semanas. Ante esto, el avance del Covid-19 muestra todos los días y cada día un problema de fondo: la precariedad del sistema de salud pública para enfrentar lo que se viene. La irrisoria cantidad de camas de internación en terapia intensiva (120 en la Ciudad de Buenos Aires), la falta de recursos para hacer los test diagnósticos o la escasez de respiradores (lo cual es un insumo fundamental para enfrentar un virus respiratorio) forman parte del estado basal de vaciamiento de la salud previo a la emergencia sanitaria por coronavirus. Pero el problema central que ahora busca atender el gobierno con el llamado a “voluntarios” es la falta de personal en los hospitales y centros de salud que, por un lado, es una situación urgente que es necesario atender en el marco de una pandemia y, por el otro, el resultado de las pésimas condiciones laborales y la falta de nuevas contrataciones de los últimos años. La pandemia pone al desnudo una realidad de miseria preexistente.

Los estudiantes y los trabajadores de la salud no podemos ser el paliativo de un sistema de salud colapsado. Es necesario defender un planteo integral de medidas para hacerle frente a la inminente propagación masiva del virus, entre las cuales -en tanto se garanticen los reclamos de los profesionales de la salud- se incluya la contratación de estudiantes de los últimos años de formación con seguro y remuneración, así como con especificación de tareas a realizar (atención telefónica, tareas administrativas, etc.), las cuales en ningún caso pueden ser tareas de riesgo,

tanto para la salud de los estudiantes como de los pacientes.

El gobierno dispone de los fondos para estas iniciativas, si no las lleva adelante es un problema de voluntad política. Alberto Fernández no tocó un peso de las grandes sumas destinadas día a día al pago de intereses de deuda, de los subsidios a las patronales y de los beneficios de la Iglesia católica. La defensa de la salud frente a la pandemia debe ser la prioridad número uno.

¿Qué medidas habría que tomar?

Para darle una respuesta real a la falta de personal en el sistema de salud, en primer lugar, es necesario una convocatoria para la contratación de profesionales con salarios acorde con la canasta básica. El gobierno de la Ciudad anunció una convocatoria de profesionales, ofertando un salario neto cercano a la línea de pobreza y aún así hay más de 8 mil enfermeros inscriptos. Es necesario el pase a planta de todos los residentes del último año que no cuentan con estabilidad laboral al finalizar su especialización. Como medida urgente, es necesario el salario y ART para los cientos de miles de concurrentes de todo el país que, en muchos casos, no forman parte de los equipos de salud para combatir la pandemia porque no tienen seguro y condiciones que los amparen.

La UBA como el conjunto de las universidades del país deben poner sus recursos materiales e intelectuales al servicio de esta emergencia de manera centralizada por el Estado en el marco de un sistema único de salud, que centralice los recursos públicos y privados. Es necesaria una inversión de presupuesto extraordinaria que garantice todos los insumos necesarios y la bioseguridad de quienes, como dicen, están en la primera línea en la lucha contra el coronavirus: los trabajadores. El llamado a los estudiantes para hacer frente al coronavirus debe estar sostenido sobre esas bases.

Compartimos los reclamos de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires:

- Elementos de protección en hospitales.
- Aumento urgente de salarios para todos los profesionales de la salud.
- Salario para concurrentes.
- Reconocimiento de licencias a profesionales dentro de la población de riesgo.
- Incorporación de enfermeros con salarios y derechos laborales correspondientes.

Lucro capitalista o lucha contra la pandemia



de lucha. Lo mismo en varios ferrocarriles y líneas de colectivos. En Morvillo, la batalla contra la insistencia patronal para reabrir la fábrica es permanente.

La patronal del subte intentó alargar la jornada de trabajo por las licencias, los call centers hacían a miles de trabajadores, los empleados de supermercados (uno de los sectores más expuestos) están reclamando la reducción de la jornada laboral.

Los docentes fueron una “avanzada” que logró imponer la suspensión de las clases y más tarde las guardias mínimas. Se pueden citar ejemplos de las reparticiones estatales, judiciales y, desde ya, de la Salud, la primera línea de combate contra el virus, que cuentan con presupuestos completamente insuficientes y condiciones de trabajo deplorables.

El movimiento obrero da batalla al aislamiento y agudiza su capacidad creativa. En este cuadro tan complejo, las redes sociales cumplen un rol importante, deliberativo y resolutivo, como instrumento de organización obrera.

Estas acciones “por abajo” contra los abusos de los capitalistas contrastan con la parálisis de la CGT y las CTA, que han salido a respaldar enteramente al gobierno e instan a los trabajadores de sus gremios a “poner el hombro”, mientras

ellos se protegen en sus casas.

Frente a denuncias masivas de atropellos a las normas de la cuarentena y salubridad establecidas, apenas responden con tibias cartas que nadie toma en cuenta, cuando no se alinean directamente con las patronales. Superar a estas direcciones sindicales es una cuestión de estricta salud pública.

Un programa contra el virus y contra el abuso patronal

La Coordinadora Sindical Clasiesta está difundiendo una declaración política frente al abuso patronal y la crisis sanitaria en el marco de la bancarrota capitalista. En su programa declara: “Los trabajadores somos quienes cada día, y hoy más aún, aseguramos el funcionamiento de la economía y, por lo tanto, los únicos realmente interesados en velar por las condiciones de trabajo, higiene y salubridad. Para eso impulsamos la puesta en pie comités de higiene, seguridad y preservación de la salud en cada lugar de trabajo de actividades esenciales.”

Pero el aislamiento y la protección no son suficientes para derrotar al virus. Para luchar efectivamente contra la pandemia es imprescindible volcar enormes recursos que están, pero se usan para honrar los descomunales pagos de la deuda pública. Para ilustrar esto digamos que, entre enero y marzo, los vencimientos suman 280.000

millones de pesos. Se trata de un negociado de los grupos financieros a tasas infernales de interés, que han ido sumando deuda sobre deuda.

Es necesaria la centralización de todo el sistema sanitario -estatal, privado y de obras sociales- bajo control de los trabajadores y reconvertir un sector de la industria que no esté afectado a la producción de bienes esenciales para fabricar respiradores, camillas y todo lo necesario para alimentar y curar a la población. La nacionalización de empresas estratégicas, como laboratorios y las dedicadas al equipamiento sanitario, se debe colocar a debate de la clase obrera.

Para garantizar el cumplimiento riguroso de la cuarentena y defender las medidas elementales que las patronales incumplen defendemos irrestrictamente el derecho de organización gremial y la acción política y sindical de los trabajadores.”

Los trabajadores tenemos que sacar conclusiones de la crisis. La burguesía no conoce de límites en aras de aumentar sus ganancias y preservar sus negocios. El Estado capitalista funciona como el garante de esos negocios. La salud del pueblo trabajador no puede quedar en sus manos. La lucha contra la pandemia no es compatible con el lucro capitalista.

Sebastián Rodríguez

MOVIMIENTO PIQUETERO

La situación en los barrios en medio del coronavirus



Marian Lili Rojas y Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, en Canal 9

El martes 24 de marzo, Marian Lili Rojas, delegada del Polo Obrero, estuvo en el programa de Canal 9, “Nada Personal”, conducido por la periodista Viviana Canosa. El testimonio de Lili fue contundente. La compañera del Polo Obrero, a cargo de uno de los comedores de La Matanza, relató la situación de persecución policial que se vive en los barrios pobres: “La forma en la que está el Estado en los barrios es a través de una policía que verduguea a los pibes. No van a los barrios a hacer operativos por el coronavirus sino a una contención de hambre y desatención estatal que se vive en los barrios más pobres y la lucha que impulsan las compañeras y los compañeros del Polo Obrero y las organizaciones sociales con las que pelean día a día por la salud y las condiciones de vida de la población trabajadora más precarizada y desocupada.

“Es muy duro escuchar a los profesionales y a los políticos que hablan de qué hay que hacer cuando no tenemos ni siquiera lavandina en los comedores -reunió Lili-. Antes de coronavirus existía el dengue. Tenemos tres comedores cerca del Ceamse. Nosotros siempre reclamamos en salud. Pero nunca se invirtió, como no se invierte en educación ni en vivienda” -explicó y lo graficó sencillamente con su caso: “No tenemos casa, yo vivo en una villa, Santa Clara, en Isidro Casanova. Escuchamos que dicen que haya una persona en cada pieza, yo tengo siete pibes y vivimos en dos piezas”.

Lili denunció que desde el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense les piden que vayan a buscar garrafas, cuando los compañeros del comedor no tienen vehículo, y reclamó porque no tienen qué cocinar para las más de cuatro mil personas que comen en los 35 comedores: “Esperamos que llegue la ayuda alimentaria que, cuando llega para 35 comedores, para 4.000 personas, son solo 3.000 kilos. Los pibes se van a la cama sin comer. La única comida es la que le da el comedor, que no es milanesa ni asado, es un gui-

no. Si nos dan los alimentos, vamos a ir a cocinar para los pibes”.

Eduardo “Chiquito” Belliboni, dirigente del Polo Obrero, agregó al relato de Lili la situación de persecución policial que se vive en los barrios pobres: “La forma en la que está el Estado en los barrios es a través de una policía que verduguea a los pibes. No van a los barrios a hacer operativos por el coronavirus sino a una contención de hambre y desatención estatal que se vive en los barrios más pobres y la lucha que impulsan las compañeras y los compañeros del Polo Obrero y las organizaciones sociales con las que pelean día a día por la salud y las condiciones de vida de la población trabajadora más precarizada y desocupada.”

“En Argentina hay 4.400 barrios populares. El 93% no tiene agua potable.”

“Las patronales no actúan ‘solidariamente’, obligan a los trabajadores a dictar el paro porque no cesan actividades no necesarias/ esenciales”, denunció Belliboni y planteó que el gobierno tiene que parar los despidos y suspensiones.

“En Argentina se discute cómo pagar la deuda externa. ¿Está primero la vida? El 31, Guzmán va a discutir la renegociación de la deuda. ¿Hay que pagar la deuda? Antes decíamos ‘o pagamos la deuda o comemos’. Ahora decimos ‘o pagamos la deuda o nos morimos’.”

Lili es una destacada luchadora que forma parte, como bien dijo, de “hombres y mujeres aguerridos que llevan la olla hasta el último rincón” en las peores situaciones y crisis sociales. Su relato, que contó la historia de los miles de trabajadoras y trabajadores que viven en las villas de todo el país, mostró la cara más grave de la crisis sanitaria, “lo que no quieren mostrar”.

El Polo Obrero denuncia que los anuncios del gobierno son tardíos e insuficientes, y reclama la provisión de agua potable en asentamientos y villas de emergencia, fumigación y descacharramiento de basurales y descampados; la inmediata provisión de elementos de higiene para los comedores populares (barbijos, guantes, cofias, batas descartables, alcohol en gel, lavandina, desinfectante en aerosol y repelente) y de kits de higiene; el aumento de las partidas alimentarias para los comedores populares para hacer frente al aumento de la demanda; la extensión de la tarjeta Alimentar a todos los desocupados con hijos de hasta 18 años de edad; la prohibición de despidos y suspensiones; la apertura de los programas sociales para todos los desocupados; duplicación de los montos de los programas; creación de un seguro al parado de 30.000 pesos, indexado por costo de vida; no al pago de la deuda externa, que los recursos se utilicen para atender la emergencia.

Redacción



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Desobediencia municipal y crisis sanitaria



En los últimos días se han producido autoaislamientos de municipios enteros de la provincia de Buenos Aires, tomando el ejemplo de varias provincias que se adelantaron a cerrar sus puertas. Varios intendentes de distritos como Ezeiza, Dolores, Olavarría, Necochea, Bolívar, Azul o San Vicente resolvieron bloquear con tierra los accesos para evitar el paso de cualquier vehículo que quisiera entrar al distrito. Varios constitucionalistas debaten sobre el carácter de estas medidas, que parecen extenderse en toda la provincia, contrariando las “órdenes” del gobernador Axel Kicillof. Esto ha abierto una crisis política entre los intendentes y el gobernador, ya que muchos municipios prefieren reportar al Presidente y recibir a cambio refuerzos presupuestarios especiales.

Sumado a esto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la medida de cerrar casi todos los accesos y solo dejar doce vías de ingreso, donde han montado duros controles de ingreso a la Capital. ¿A qué se deben esta actitud de aislamiento de los municipios y las fuertes restricciones al ingreso a la Ciudad?

Los intendentes empiezan a tomar estas medidas con el argumento de “garantizar la cuarentena” cuando, en realidad, intentan cuidarse a ellos mismos de una realidad hospitalaria en toda la provincia, que augura un desastre sanitario. Larreta reacciona ante la previsible “lluvia” de infectados bonaerenses. Desde la década del '80 se ha llevado adelante un proceso de “descentralización” de la salud pública provincial que ha colocado en los desfinanciados municipios la carga de la atención sanitaria. Esto provocó un dete-

riorio sin precedentes en el sistema hospitalario donde la falta de insumos, la precariedad laboral y la ausencia de mantenimiento elemental han quedado bajo la responsabilidad de cajas municipales cada día más degradadas.

Un informe de la Cicop (sindicato de profesionales de la salud) señala que “en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires hay 215 hospitales y 1.500 unidades sanitarias donde trabajan alrededor de 17.000 profesionales de la salud. Poseen la mitad de las camas de internación pública de la provincia. Son en su mayoría de baja complejidad”. Con estos datos se entienden las acciones desesperadas de los intendentes que, defendiendo la precariedad y la municipalización, se encuentran frente a la posibilidad de un desmadre sanitario. Saben mejor que nadie que la extensión de la pandemia en la provincia provocará un colapso inmediato del sistema hospitalario. El informe de la Cicop continúa señalando que “la desarticulación del Sistema Público de Salud Provincial, la debilidad organizativa de las Zonas Sanitarias es elogiada por el Banco Mundial en su documento 26144AR/03. Córdoba y Buenos Aires son las dos provincias

donde más ha avanzado la descentralización (municipalización) del sistema de salud”.

Junto con esta realidad se encuentran los 77 hospitales provinciales. El relevamiento realizado en 2016 indicó que de los 77 hospitales, “53 requieren inversión en infraestructura y 20 no necesitan una inversión urgente”. En 23 hospitales, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) señaló que “en todos, se detectaron irregularidades producto de falta de agua potable, cloacas tapadas y otros problemas edilicios como filtraciones en los techos”. Para agregar un dato ilustrativo sobre la situación, en 2010, el 35% de los habitantes de la pro-

vincia no tenía obra social (último dato disponible).

El completo desborde cotidiano de los hospitales de la provincia y la escasa atención en especialidades o cuidados intensivos provocó que miles de trabajadores bonaerenses tuvieran que trasladarse a atenderse en el sistema de salud de la Ciudad, provocando allí también un cuadro de saturación en la atención sanitaria. La completa ausencia de una inversión en el sistema de salud de la provincia, la falta de insumos elementales, material de protección para los trabajadores de la salud, la precariedad laboral, es una realidad cotidiana. Las medidas a tomar no pueden ser parciales, deberán estar

a la escala de las necesidades que plantea la pandemia actual que pone en riesgo la vida de miles de trabajadores. La situación a la que han llevado al sistema de salud, gobierno tras gobierno en la provincia y en el país, plantea una reorganización de emergencia del conjunto del sistema sanitario nacional y la utilización de todos los recursos para esta finalidad. Para esto será necesario rechazar de plano el pago de la usura que representan las deudas provincial y nacional.

Nuestro planteo

En lugar de tomar medidas que solo perjudicarán a mediano plazo al conjunto del pueblo trabajador de la provincia, es pertinente la centralización única de todo el sistema de salud público y privado, así como la nacionalización de todos los hospitales municipales y provinciales. Para atender las necesidades de cada vecino de hasta el último municipio de la provincia que pueda contagiarse, será necesario un comando único de trabajadores de la salud, junto con comisiones en la provincia y en todos los municipios, que controlen la utilización de los recursos y verifiquen las necesidades de cada lugar, incluyendo la disponibilidad conjunta del sistema público, privado y de obras sociales. El gobierno de Fernández no ha anunciado ningún plan que cubra estas necesidades. Por ahora, sólo utiliza la herramienta de la cuarentena. Junto con los trabajadores de la salud que sufren esta realidad día tras día, impulsemos estas reivindicaciones, donde se juega la salud de todos los trabajadores de la provincia.

Juan Pablo Rodríguez

El 24, miles reafirmamos que no nos olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos

A pesar de la pandemia, miles reclamaron cárcel común y efectiva para los genocidas y el fin de la impunidad de ayer y de hoy

La existencia de la pandemia imposibilitó, por primera vez desde la caída de la última dictadura, que se realice la enorme marcha antirrepresiva que sucede cada vez que se cumple un aniversario del golpe militar del 24 de marzo. Esas banderas de lucha, sin embargo, estuvieron presentes a lo largo del día en manos de miles que levantaron reclamos, planes y denuncias, desde sus redes sociales, o hasta colgando pañuelos y banderas desde sus balcones.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia produjo un documento político verdaderamente excepcional, reflejando la continuidad del reagrupamiento de lucha por los derechos humanos, que ha rechazado la cooptación estatal que neutralizó a buena parte de

los organismos bajo los gobiernos kirchneristas.

El documento tiene la enorme lucidez de plantear la ruptura con el FMI y la necesidad frente a la pandemia de volcar los recursos a reconstruir la atención sanitaria vaciada por años de ajuste. Rechaza expresamente la pretensión de “dar vuelta la página”, que planteara recientemente Alberto Fernández, buscando reconvertir a las Fuerzas Armadas como una herramienta política de cara al control social.

Aunque el documento no pudo ser leído en las calles, se lanzó en simultáneo en todo el país mediante un video, que las cientos de organizaciones pertenecientes al Encuentro subieron a sus redes.

Desde el Partido Obrero continuamos la transmisión del video

con una charla en vivo que fue seguida con atención por cientos de compañeros, que fueron rotando por nuestra cuenta de Facebook, con picos de 900 espectadores.

El panel lo integró Néstor Pitrola; “Tati” Fernández, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires y militante de la UJS, y Liliana Alaniz, abogada querellante en la causa Esma y dirigente de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel). Eduardo Salas actuó como coordinador.

Allí se desarrollaron importantes conceptos sobre el carácter histórico y de clase de la dictadura y la naturaleza de la resistencia que protagonizaron contra ella sectores de la clase obrera y de la juventud. Se rescataron aspectos de la militancia del PO bajo la dictadura, re-

construyendo la historia de varios de sus compañeros desaparecidos. La charla motivó decenas de comentarios y preguntas. Un tema recurrente fue la inquietud frente a la militarización que implica la cuarentena y cómo enfrentamos una manipulación represiva de la pandemia que el Estado emprenda.

El portal de *Prensa Obrera* también fue un punto donde se vivió con intensidad el 24 de Marzo. Pudimos constatar que se trató de un día con una avidez política extraordinaria, superando las 100 mil visitas a nuestra página en el día. Junto al seguimiento, minuto a minuto, de los avatares de la implementación de la cuarentena en el país y las reacciones de los trabajadores, fue un atractivo la importante sección sobre el 24 de Marzo. Con más

de veinte notas preparadas por un amplio equipo de compañeros, las notas subidas reconstruyen distintos aspectos del proceso histórico de la dictadura, de la lucha obrera y de masas contra esta, de la militancia y las posiciones de PO y de la izquierda, así como también del proceso de lucha contra la impunidad hasta el día de hoy, desde un balance de los juicios a la cooptación de los organismos de derechos humanos y la campaña por la reconciliación con las Fuerzas Armadas.

La militancia del Partido Obrero fue parte de una enorme marea humana que buscó, bajo condiciones insólitas, cómo expresar su voluntad de luchar contra la impunidad de ayer y de hoy.

Guillermo Kane

Coronavirus: horizonte negro para América Latina

Organicemos la respuesta de los trabajadores

En un artículo de opinión publicado en el *New York Times*, del 19/3, escrito por el director del Instituto de Estudios de Políticas para Salud (IEPS) de Brasil, Miguel Lago, se señala que América Latina podría convertirse en “la mayor víctima del coronavirus”. Afirmo que el impacto podría ser peor que en Europa, donde ya se han registrado más de 10 mil muertes y 150 mil infectados.

El articulista apoya su pronóstico en un informe realizado por el IEPS, que pinta un cuadro de profundo desfinanciamiento de los sistemas sanitarios de los países latinoamericanos. Compara, por ejemplo, que mientras México destina el 3 por ciento de su PBI al sistema público de salud, y Venezuela solo el 1,7 por ciento, Italia, que hoy es el país más afectado por el progreso de la pandemia, destina el 6,7 por ciento. En un estudio realizado por ese mismo organismo se establece que los costos de unidades de cuidados intensivos (UCI) que necesitaría Brasil para atender a pacientes de Covid-19 podrían llegar a equivaler a lo que el gobierno brasileño gastó en hospitalizaciones en todo 2019.

Pero Lago menciona también

el impacto del dengue, que tuvo brotes muy importantes en Brasil, Honduras y Paraguay, y que sólo en 2019, en toda América Latina, afectó a 3 millones de personas y se cobró más de 1.500 vidas, llegando a su mayor pico histórico. Señala también el problema de la enorme cantidad de víctimas de violencia en América Latina.

Este panorama es el que lleva a Miguel Lago a sacar la conclusión de que “Si una parte significativa de la población es infectada, los sistemas de salud tendrán que elegir entre atender a las víctimas del Covid-19 o a los portadores de todas las otras enfermedades”.

Gobiernos capitalistas y pandemia

En el marco del salto pegado por la crisis capitalista mundial, todos los países del subcontinente han sufrido derrumbes históricos de sus bolsas; devaluaciones monetarias y el derrumbe de los principales precios de las materias primas (petróleo, cobre, soja, etc.). En este escenario, todos los gobiernos latinoamericanos han reafirmado su orientación capitalista. Las políticas de los gobiernos han oscilado entre las que desprecian la gravedad de

la crisis; las que la utilizan como excusa para avanzar en un reforzamiento del aparato represivo y en la regimentación social, y las que consisten en medidas parciales y limitadas, que resultan completamente insuficientes para preservar la salud de la población.

Entre los que optaron por despreciar la gravedad de la crisis tenemos a un exponente del derecho latinoamericano, el presidente brasileño Jair Bolsonaro, y a un exponente del progresismo ‘nacional y popular’, Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que Brasil cuenta con más de 2.000 contagiados y 46 muertos, Bolsonaro volvió a catalogar a la pandemia como un “resfriadito” y condenó los cierres de escuela, la cuarentena y la parálisis de las actividades, aunque sí anunció una política de rescate a los empresarios. Por su parte, López Obrador, llamó a los mexicanos a “seguir con su vida normal”. El giro que emprendió ante el acelerado avance del virus es hartó limitado, ya que solo plantea la cuarentena con goce de haberes para los adultos mayores.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, se valió del coronavirus para intentar gambetear la rebe-



lión popular, que se mantiene viva desde octubre del año pasado y que desde principios de marzo había comenzado a recalentarse. Las medidas de Piñera, en lo fundamental, se han circunscripto a declarar un toque de queda y a volver a colocar en las calles a los militares. Esto en el marco de un sistema público sanitario devastado por un largo proceso de privatización. El oficialismo y la oposición han acordado aplazar hasta octubre el plebiscito constitucional, inicialmente previsto para fines de abril. Y, del mismo modo, se aplazaron las elecciones bolivianas del 3 de mayo. La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez, dictó un decreto para asegurar, en primer lugar, “el orden público y la paz social”, con el objetivo de poner un punto final a la resistencia popular que despertó la lucha contra el golpe.

Intervención

La pretendida “unidad nacional” contra la pandemia, que distintos

gobiernos han intentado poner en pie, tiene patas cortas. Pues con el desarrollo de la crisis, rápidamente queda en evidencia que los trabajadores y los sectores populares son abandonados a su suerte y son los principales afectados por la pandemia. Todas las contradicciones sociales, que antes del desembarco del coronavirus en América Latina desataron enormes rebeliones populares, lejos de borrarse, se están agravando sensiblemente.

En muchos puntos del continente ya se constata un principio de intervención obrera y popular contra las “políticas sanitarias” de los gobiernos capitalistas ante el progreso de la pandemia, con cacerolazos masivos, paros y piquetes. Reclamando cuarentenas efectivas e insumos para enfrentar el virus. Es el rumbo que hay que profundizar a escala continental.

Pablo Giachello

Brasil: el coronavirus y Bolsonaro, un cóctel letal

Con más de 30 muertos y 2 mil infectados, Brasil se ha convertido en el país latinoamericano más afectado por el coronavirus. Y si bien el gobierno de Jair Bolsonaro ha dictado el estado de calamidad pública, que le permite burlar las metas de déficit fiscal para contar con mayores recursos materiales, hasta el día de hoy se niega a reconocer el alcance catastrófico que puede tener la crisis y se niega a aplicar las medidas necesarias para enfrentarlo.

La tosudez del gobierno frente a la enfermedad no ha obstado para que se lance a un rescate de las patronales, toda vez que la pandemia va a producir estragos económicos. Este lunes, Bolsonaro habilitó a las empresas a dejar de pagar los sueldos por hasta cuatro meses y suspender los contratos de trabajo, anticipar vacaciones, computar la cuarentena como parte de un banco de horas (o sea, que ésta deba ser compensada con futuras jornadas superextenuantes de trabajo) y todo un tropel complementario de medidas antiobreras.

Pese a que Bolsonaro debió recular en pocas horas en el primero de

los puntos, debido a la conmoción popular que provocaron los anuncios, siguen en pie el resto de los ataques. Además, sin esperar ninguna normativa, las patronales ya se han lanzado a una poda brutal del salario. En la misma línea, el Ministerio de Economía autorizó una rebaja salarial del 20% de los trabajadores estatales durante la pandemia.

El gobierno brasileño busca transferir la crisis sobre los hombros de los explotados. La pandemia ha barrido con las promesas oficiales de un despegue económico. Se estima que el PBI brasileño se puede contraer hasta 10% en el año. La Bolsa es la que ha sufrido la mayor caída del mundo: un 52% en dólares con respecto de enero, en tanto que el real se cotiza arriba de las 5 unidades por dólar, siendo una de las monedas que más se devaluó junto al peso mexicano, el rublo y la corona noruega (*Brasil 247*, 23/3).

La pandemia ha agravado también la crisis política. Bolsonaro protagonizó durísimos choques públicos con los gobernadores de San Pablo y Río de Janeiro (ambos de derecha), que han lanzado por

su cuenta las medidas de cuarentena que el ex capitán de navío resiste. Estos mandatarios cuidan su propia supervivencia ante una situación de crisis extrema.

También se han agudizado los choques entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. El 15 de marzo pasado, Bolsonaro participó de un acto en Brasilia, donde reclamó el cierre del Parlamento, y que sólo reunió un puñado de seguidores debido a la pandemia. Pese al fracaso de la medida, mostró las tendencias bonapartistas que caracterizan al gobierno actual. Los titulares de la Cámara de Diputados y del Senado, Rodrigo Maia y Davi Alcolumbre (ambos de Demócratas, una formación de “centro”), cruzaron a Bolsonaro tanto por el acto como por la gestión frente al virus.

En este contexto de crisis del gobierno, hay sectores del PT que están impulsando un acuerdo “amplio” contra Bolsonaro. El ex canciller Celso Amorim, por ejemplo, propulsa un frente opositor junto a sectores de la izquierda y del “centro”. “El PT se tiene que abrir”, le dijo a *La Nación* (23/3). Con un acuerdo de estas ca-

racterísticas, el PT se postularía como relevo político ante la crisis y buscaría reconquistar el apoyo de las grandes empresas, aunque al precio de anular un acuerdo con algunas de las fuerzas que impulsaron el golpe contra Dilma Rousseff en 2016. Sería un sinsentido: “salvar a la democracia” en un frente con golpistas.

Las masas

La desastrosa gestión frente al coronavirus ha disparado el repudio popular contra el gobierno. Este ha adoptado la forma de cacerolazos masivos en los que repiquetea la consigna “Fuera Bolsonaro”.

El movimiento obrero, pese a que ha sido golpeado por una serie de derrotas (imposición de la reforma previsional, despidos masivos en el petróleo), ha salido a defender sus reivindicaciones ante la crisis. Los metalúrgicos del ABC han ido a la huelga y arrancaron en varias plantas la licencia remunerada. Los trabajadores de los call centers, que realizan sus labores hacinados y en condiciones muy propicias para el contagio, han protagonizado protestas en los lugares de trabajo de varias

ciudades que desafían la “esencialidad” dictada por el gobierno de Bolsonaro y el despotismo patronal. Entre los petroleros crece el malestar, pues no se han paralizado las actividades no esenciales.

En estas condiciones, el principal freno a la lucha de las masas lo constituyen las direcciones sindicales. La CUT, ligada al PT, ha impulsado una declaración junto a otras centrales (como Fuerza Sindical, CTB y UGT) que cuestiona las últimas medidas de Bolsonaro, pero no plantea ningún plan de lucha ni reclama la suspensión de las actividades no esenciales. Dicha declaración pone el centro de gravedad en una exhortación a las mismas instituciones del régimen. “Que el Congreso Nacional asuma el protagonismo”, demanda. Pero buena parte de ese Congreso es el mismo que votó la destitución de Rousseff y está completamente manchado por los sobornos.

Es necesario un programa obrero frente a la crisis, como parte de la lucha para echar a Bolsonaro-Guedes y su plan de guerra contra las masas.

Gustavo Montenegro

La tormenta perfecta: pandemia y crisis capitalista

Lo que se viene y cómo lo enfrentamos

Wall Street -y lo mismo se replicó a escala global- volvió a caer, a pesar de otra desesperada movida de la Reserva Federal. El Banco Central estadounidense anunció la eliminación de los límites a las compras de bonos del Tesoro y de activos respaldados por hipotecas, una decisión que, en los hechos, implica imprimir todo el dinero que haga falta para aportar liquidez a los mercados.

Pero el anuncio no impidió que los mercados sufrieran otro desplome y profundizaran su derrape por el avance de la pandemia y la guerra de precios en el mercado del petróleo. Pero, por ahora, nada indica que este colapso haya tocado fondo.

Lo que se prevén son caídas espectaculares de las grandes economías. Estados Unidos se contraería el segundo trimestre en un 14%; la Unión Europea, un 22% y China, un 30%. El informe de Deutsche Bank alerta que "la caída del PBI en el segundo trimestre, que anticipamos, excederá sustancialmente cualquier cosa registrada al menos desde la Segunda Guerra Mundial".

Esta lluvia de dinero, sin embargo, no servirá para reactivar las economías. A lo sumo puede achicar daños, pero no está en condiciones de revertir las tendencias a la recesión que ya estaban en pleno desarrollo previo a la pandemia. Cada vez más analistas alertan que no estamos ante un crisis temporal y pasajera, "No se puede descartar la posibilidad de una depresión más larga y destructiva" (*Wall Street Journal*).

Crisis de solvencia

Lo que enfrentamos es una crisis de solvencia y no simplemente de liquidez. Un universo creciente de empresas, entre ellas, las corporaciones líderes, venía sufriendo un retroceso en su producción y ventas, así como una caída de sus precios y rentabilidad. Estas han provocado una retracción creciente de sus inversiones y, al mismo tiempo, un salto sin precedente en sus niveles de endeudamiento. Las deudas corporativas, fuera del sistema bancario, pasaron desde 48 billones de dólares a 75 billones hoy, más que tres veces el PBI anual de Estados Unidos, según el Institute of International Finance.

La guerra comercial -y agreguemos monetaria- agrava el cuadro. En lugar de una acción relativamente concertada, como existió en la crisis de 2008, cada nación o bloque actúa por su cuenta y en colisiones



permanentes con los demás. Trump no se priva de azuzar a Beijing refiriéndose al "virus chino", responsabilizándolo por la pandemia pero también a sus antiguos socios de Europa, tomando medidas inconsultas, como lo fue la suspensión de los vuelos y el cierre de fronteras.

Los choques del gobierno norteamericano hacia afuera no han logrado evitar los enfrentamientos y divisiones fronteras dentro. Muchos gobernadores han tomado distancia de Trump. Sin cuarentena general, 12 estados, representativos del 40% de la población, han resuelto el aislamiento para sus distritos en momentos en que Estados Unidos ya superó a España y se convirtió en el segundo país con mayor cantidad de casos del mundo y con más de 100 muertos en un solo día. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que las medidas adoptadas para frenar los contagios eran insuficientes, Trump planteó que las restricciones para aplanar la curva de propagación del virus eran demasiado duras.

La fractura del Estado norteamericano llega al Congreso, donde republicanos y demócratas discuten y fracasan en su intento por alcanzar un acuerdo para aprobar un rescate fiscal para la economía. El grueso del paquete presentado por la Casa Blanca está dirigido al salvataje de las corporaciones y el sistema financiero más que a las necesidades populares. La medida aprobada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para brindar a los trabajadores una limitada licencia remunerada, por ejemplo, excluye a los lugares de trabajo con más de 500 trabajadores -o sea, casi la mitad de la fuerza laboral.

Del mismo modo, las fisuras in-

ternas se constatan al interior de la Unión Europea. La respuesta europea está siendo nacional a falta de una respuesta contundente del Banco Central Europeo. Las cuatro grandes economías de la Unión Europea y el Reino Unido han ido anunciando planes de estímulo gigantes, que suman casi 1,5 billones de euros en líneas de crédito para sostener empresas.

Una de las preocupaciones es que el desplome accionario corporativo sea aprovechado para compras y absorciones hostiles por parte de competidores extranjeros. La Unión Europea tiene competencias e instrumentos de sobra para actuar contra la crisis, pero su pasividad obedece a la negativa de los gobiernos más sólidos económicamente, principalmente en Alemania, Austria y Holanda, que no quieren asumir sobre sus espaldas el rescate de las naciones más endeudadas y comprometidas financieramente. Por otra parte, en particular en el caso de Alemania, es un arma para avanzar en su tutela sobre las economías más débiles del continente. El lanzamiento de eurobonos -emisiones de deuda conjuntas- viene dilatándose, aunque hay noticias de que se habría logrado un compromiso de último momento.

Situación explosiva

A nadie se le puede escapar la explosividad de la situación. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido de que 25 millones de trabajadores podrían engrosar las filas de los desempleados a lo largo de los próximos meses. La crisis también llevará a una vasta expansión del subempleo. En Estados Unidos, los recortes en nóminas, el mes que viene, podrían alcanzar los

dos millones -mucho más que la pérdida pico de empleos de 800.000 en marzo de 2009, durante la Gran Recesión. El ex consejero de Trump, Kevin Hassett, declaró a la *CNN* que Estados Unidos podría enfrentarse a otra Gran Depresión.

Los medios para contrarrestar son sensiblemente inferiores a la crisis de 2008. Los recursos, tanto monetarios y fiscales -que fueron usando y agotando en esta última década-, no son suficientes para lidiar con la envergadura de la crisis mundial.

Importa señalar que la capacidad de suministrar crédito de la banca se ha debilitado considerablemente por los 325.000 millones de dólares pagados el año pasado por las principales entidades mundiales en dividendos y recompra de acciones. El desenlace podría comenzar en los países emergentes, donde hay 72,5 billones de dólares de deuda, gran parte de ella denominada en dólares estadounidenses.

En un análisis de conjunto no se puede descuidar el lugar que le está reservado a China. El gigante asiático no está en condiciones de jugar el rol que desempeñó doce años atrás ni está en el ánimo de las autoridades chinas hacerlo. La demanda de China ayudó a sacar a la economía global de los días más oscuros de la crisis financiera de 2009.

La esperanza de una reedición del pasado, sin embargo, es infundada. Beijing está adoptando un enfoque más conservador en comparación con 2009. La deuda de China es una de las más elevadas del mundo: triplica su PBI. Esa política expansiva no ha impedido la brusca desaceleración que, antes del estallido de coronavirus, no alcanzaba al 6%, aunque hay quienes señalan que esas cifras están maquilladas.

El país asiático no está en condiciones de volver a oficiar de locomotora de la economía mundial. De modo que se abre un escenario de quiebras más masivas de sectores del capital, que es lo que ha pretendido evitar en estos años luego del hundimiento de Lehman Brothers. Esto abarca a la banca pues, pese a que los analistas hablan de que el sistema financiero es más sólido que en 2008, lo cierto es que un default corporativo arrastraría a las entidades financieras.

Nacionalizaciones y programa

Esto ha puesto en el orden del día en la agenda de discusión la cuestión de las nacionalizaciones

parciales o totales. El gobierno italiano acaba de nacionalizar Alitalia. En el Reino Unido, el gobierno conservador está estudiando un plan para adquirir participaciones en compañías aéreas y otras empresas, ya que los paquetes de estímulo económico anunciados hasta ahora no son suficientes para evitar los colapsos. En Estados Unidos, decenas de empresas estadounidenses -desde el fabricante de aviones Boeing hasta la empresa de telecomunicaciones Verizon- están presionando para que se las incluyan en los paquetes de rescate que está preparando la administración Trump. No hay que perder de vista que estos rescates van unidos a rebajas en los salarios, a recortes en condiciones de trabajo y también de puestos de trabajo. Ni siquiera es una garantía frente a los despidos.

La clase trabajadora a escala internacional tiene que elaborar su propia respuesta para enfrentar la crisis. Esto pone en el orden del día un programa, que los trabajadores argentinos están empezando a enarbolar: prohibición de despidos y suspensiones; licencias pagas a cargo de la patronal; reparto de las horas de trabajo; interrupción de la producción no esencial para proteger a los trabajadores de una exposición innecesaria, y el control obrero y popular en todos los lugares de trabajo, estudio y vivienda para preservar la salud de los trabajadores y asegurar el cumplimiento de todos los protocolos y la puesta en marcha de todas las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia.

Por supuesto, esto debe estar unido a un reforzamiento del presupuesto de salud y a la centralización de todos los recursos públicos y privados en dicha área. En vez de un rescate de las corporaciones en crisis o quebradas, habría que nacionalizarlas y declararlas de utilidad pública y reacondicionarlas en el marco de un plan general de reconversión general de toda la economía, dando privilegio a la producción de equipo médico y otros insumos imprescindibles para proteger la salud pública. Las enormes ganancias acumuladas por las corporaciones tienen que ser utilizadas para hacer frente al flagelo y la actual catástrofe económica y social. La clase obrera debe tomar la iniciativa e intervenir.

Pablo Heller